

96

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO  
CIRCUITO DE BOGOTÁ  
SECCIÓN SEGUNDA**

**EXPEDIENTE 11001 33 35 021 2018 00100 00**

Bogotá D.C., **27 ABR 2018**

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto a través de apoderado por la señora **Ludivia Peñaloza Morales** contra la **Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES**, ingresa al Despacho para el siguiente:

**ASUNTO**

Decidir acerca del recurso interpuesto por la parte actora contra el auto de 6 de abril de 2018 mediante el cual se declaró la falta de competencia y se remitió el expediente a los Juzgados Administrativos de Arauca.

Al respecto, se

**CONSIDERA**

Si bien, el memorialista omite indicar el tipo de recurso interpuesto, si el de reposición o el de apelación, el Despacho descarta que sea el de apelación porque el artículo 243 del CPACA no señala entre los autos apelables el que declara la falta de competencia y ordena la consecuente remisión del expediente al competente, y por consiguiente, dicha providencia sólo sería susceptible del recurso horizontal, bajo el entendido que el artículo 242 *ejusdem* excluye la acumulación del recurso de reposición con el de apelación, al preceptual que el “recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica”.

Ahora bien, el recurso interpuesto se sustenta en que el artículo 156, numeral 2º, del CPACA determinó que la competencia por razón del territorio “En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se

97

expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.”.

Sin embargo, en el auto objeto del recurso se aplicó la regla de competencia del siguiente numeral 3º del mismo artículo, según la cual “En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios”.

Vemos que el artículo 156 del CPACA asigna la competencia territorial con base en dos aspectos distintos: su numeral 2º la determina por el lugar del domicilio del demandante, mientras que el numeral 3º la fija por el último lugar de prestación de servicios del demandante.

En tales eventos, en los cuales dos normas regulan de forma distinta una misma situación jurídica – la competencia territorial –, el operador jurídico tendrá que determinar cuál norma aplicar, pues es claro que no se pueden aplicar simultáneamente por ser incompatibles entre sí, es decir, o se aplica la competencia por razón del domicilio del demandante o la competencia derivada del último lugar de prestación de servicios.

La aludida colisión normativa se soluciona con los criterios establecidos en la parte primera de la Ley 153 de 1887 que trata de las “REGLAS GENERALES SOBRE VALIDEZ Y APLICACION DE LAS LEYES”, específicamente, los establecidos en sus artículos 2º y 3º, que prevén el conflicto entre una norma anterior y posterior y entre una norma general y especial, respectivamente.

Cuando el conflicto es entre una norma anterior y posterior, el citado artículo 2º señala que “La ley posterior prevalece sobre la ley anterior”, incluso, cuando “ambas preexisten al hecho que se juzga”. Mientras que el conflicto normativo entre un precepto general y otro especial, lo trató el siguiente artículo 3º al disponer que “Estímase insubsistente una disposición legal (...) por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores”.

98

En este asunto, el Despacho considera que la regla de competencia por el último lugar de prestación de servicios prevalece sobre aquella que determina la competencia por el lugar de domicilio del demandante, por satisfacer los aludidos criterios de la Ley 153 de 1987, es decir, por ser posterior y especial.

En efecto, la regla competencia por el lugar de domicilio del demandante es ley anterior, pues se encuentra en el numeral 2º del artículo 156 del CPACA, mientras que la competencia por el último lugar de prestación de servicios se ubica posteriormente, esto es, en el numeral 3º del artículo 156 del CPACA, y por otra parte, la competencia por el lugar del domicilio del demandante constituye una regla general que se aplica a todas las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que la competencia por el último lugar de prestación de servicios es una regla especial que se aplica exclusivamente a las demandas de nulidad y restablecimiento de carácter laboral.

Dado que el auto recurrido determinó la competencia con base en la norma posterior y especial del numeral 3º del artículo 156 del CPACA, no le asiste la razón a la recurrente al afirmar que se aplica la norma anterior y general del numeral 2º del artículo 156 ejusdem., y por consiguiente, no prospera el recurso en estudio.

Cabe decir, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estimado que fijar la competencia territorial por el último lugar de prestación de servicios, más no por el lugar de domicilio del demandante, es un criterio razonable de acuerdo al análisis que realizó del derogado Código Contencioso Administrativo, como se puede apreciar en el siguiente aparte:

“Por lo anterior la competencia territorial establecida en el artículo 134D adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, es razonable, pues conserva un principio lógico de relación entre lo que se pretende con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en un asunto laboral y el sitio donde se debe incoar, que para el caso es el último lugar donde se prestó el servicio. No se están introduciendo elementos extraños en la fijación de la competencia sino que se parte de un elemento determinante, que es el último lugar donde se prestó el servicio.

99.

Pues, se considera que en este lugar se deben encontrar los elementos que permitirán que la Administración de Justicia se imparta de conformidad con los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, al existir el contacto inmediato con los documentos y pruebas de la relación laboral.

Finalmente, es importante dejar consignado que la regla de competencia aplicable atiende a la certificación del Coordinador del Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas, según la cual la señora Ludivia Peñaloza Morales, inclusive a la fecha de retiro, “desempeñaba el cargo de Técnico Administrativo Grado 15 en las Regional de Arauca” (sic).

Por lo expuesto, se **RESUELVE**

No reponer el auto de 6 de abril de 2018 mediante el cual se declaró la falta de competencia y se ordenó remitir el expediente al Juzgado Administrativo de Arauca®, por las razones aquí consignadas.

Notifíquese y cúmplase.

  
**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA**  
**JUEZ**

gpg